



República de Colombia



Sala Cuarta de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA:	PROCESO ORDINARIO LABORAL - SENTENCIA
RADICACIÓN:	05001 31 05 016 2020 00214 01
DEMANDANTE:	CLAUDIA MILENA ROMÁN
DEMANDADO:	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA
LITISCONSORTES	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA, MATEO,
PASIVA:	XIOMARA y BRAYAN HERRERA ROMÁN

Medellín, once (11) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por las Magistradas LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 29 de agosto de 2022, por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

Pretende la demandante que se declare que convivió de forma ininterrumpida con Andrés Felipe Herrera Rojas, desde el año 2000 hasta el 7 de octubre de 2007, fecha en la que él falleció, y que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes; en consecuencia, que se condene a Protección SA al reconocimiento y pago de la prestación por el fallecimiento de su compañero permanente, a partir del 7 de octubre de 2007, a la indexación de las sumas adeudadas y al pago de intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Fundamenta sus pretensiones en que el 7 de octubre de 2007 falleció Andrés Felipe Herrera Rojas, con quien convivió hasta esa fecha y desde el año 2000; que de su unión nacieron Mateo, Xiomara y Brayan, en su orden el 20 de

enero de 2001, 17 de julio de 2002 y 30 de noviembre 2003; que el padre siempre estuvo presente en celebraciones de cumpleaños y religiosas de sus hijos, nunca se separaron y compartieron lecho, techo y mesa por 7 años; que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de sus tres hijos menores de edad, y del suyo como compañera; y que, mediante escrito del 29 de febrero de 2008, Protección SA le negó la prestación por no encontrar claridad con relación al tiempo de convivencia (arch. 03, C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue admitida el 24 de mayo de 2021, ordenándose su notificación y traslado a la demandada; el 16 de septiembre de 2021 se dio por contestada; en providencia del 24 de marzo de 2022 se dispuso integrar el contradictorio con Seguros de Vida Suramericana SA, Mateo, Xiomara y Brayan Herrera Román, a quienes se les dio por contestado el libelo genitor, el 12 de mayo de 2022 (arch. 05, 08, 09 y 18; C01).

Protección se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto la demandante no acreditó convivencia permanente e ininterrumpida con el causante de la pensión reclamada, con anterioridad ni en la fecha de su fallecimiento, sino intermitente. Formuló la excepción previa de falta de integración del Litis consorcio necesario, por la cual se efectuó la integración antes referida; y de mérito, las que denominó inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda; buena fe de la entidad demandada; afectación de la sostenibilidad financiera del sistema; prescripción; y, compensación (arch. 07, C001).

Mateo Herrera Román, Brayan Herrera Román y Xiomara Herrera Román, se allanaron a las pretensiones teniendo en cuenta que como hijos del causante recibieron la pensión hasta el día en que cumplieron la mayoría de edad, el 20 de enero de 2019, 30 de noviembre de 2021 y 17 de julio de 2020, respectivamente (arch. 13, C001).

Seguros de Vida Suramericana SA se opuso a las pretensiones de la demanda, porque el derecho que tenga o no la demandante concierne a la AFP demandada, a más de que aquella no convivió con el causante. Formuló en su defensa las excepciones de mérito que denominó falta de causa para pedir

respecto de Seguros de Vida Suramericana SA y buena fe exenta de culpa; ausencia de litisconsorcio y de comunidad de suerte; ausencia de calidad de beneficiaria de la demandante; improcedencia del retroactivo; improcedencia en general de la condena en intereses moratorios y en particular respecto de Seguros de Vida Suramericana SA; y prescripción (arch. 17, C001).

III.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del 29 de agosto de 2022, negó la totalidad de pretensiones, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por Protección, y condenó en costas a la parte demandante a favor de la demandada y de Seguros de Vida Suramericana SA.

Consideró del análisis conjunto de las manifestaciones efectuadas en las declaraciones extra juicio, cuya ratificación no fue solicitada por las demandadas, y la confesión de la demandante, quien expresó claramente que su compañero permanente dejaba de convivir con ella cuando estaba en embarazo, y volvía a iniciar la convivencia cuando tenía el bebé, que no es cierto que convivieron desde el año 2000, pues el último de sus hijos nació el 30 de noviembre de 2003, además de la prueba documental en la que manifiesta que no tuvo convivencia al final de su periodo; asimismo el acta de conciliación y la denuncia de la fiscalía analizadas en conjunto, lo llevaron a concluir que tampoco convivió por lo menos al momento en que falleció el causante, ni tenía la convivencia permanente durante los últimos 5 años. Además, que cuando se le puso de presente esa información, y se le interrogó sobre la evidente contradicción en sus afirmaciones, fue evasiva, por lo que se le declaró renuente a dar explicación, teniéndose por probado que no convivió con el causante, y que la verdad que se debe acoger es la que ella suscribió en los documentos que se le pusieron de presente, en los que reconoció su firma; que si bien existió una relación, su convivencia se vio interrumpida constantemente.

En suma, que de las pruebas se puede concluir que no existió la convivencia durante 5 años, que fue interrumpida en varias oportunidades, por lo que declaró probada la excepción que propuso Protección de inexistencia de la obligación.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

La **parte demandante** interpone recurso argumentando que todas las pruebas documentales y lo escuchado en la audiencia, dan muestras de que sí hubo una convivencia, con una relación conflictiva, con salidas del hogar del afiliado fallecido por días, a donde su mamá que era vecina; que ello se sustenta en las declaraciones extra juicio allegadas, las fotos familiares anexadas; que en el informe de investigación del 25 de febrero de 2008, se presentó el certificado de EPS en el que el causante declaró que su beneficiaria era además de sus tres hijos su compañera permanente, en agosto de 2006, meses antes de su fallecimiento; allí mismo afirmó la demandante que hubo una última pelea en diciembre de 2006, muy pocos días antes del fallecimiento, lo que indica que tenemos una convivencia desde el 2000 hasta diciembre de 2006, teniendo en cuenta que él se fue de la casa, pero por ser vecino iba y volvía con su compañera permanente y sus tres hijos; y que, las denuncias de inasistencia alimentaria no desvirtúan la convivencia hasta la fecha de la muerte.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante auto del 12 de enero de 2023, se admitió el recurso de apelación concedido por el juez de instancia; y, en providencia emitida el siguiente 12 de abril, se corrió traslado a las partes, por el término de 5 días para presentar alegaciones, en los términos dispuestos en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022 (arch. 02 y 03, C02).

La demandante, Protección SA y Seguros de Vida Suramericana SA presentaron alegaciones, la primera solicitando se revoque la decisión de primera instancia, insistiendo en que la demandante y el causante convivieron desde el año 2000 y hasta el 2007; y las demandadas, solicitando que se confirme la decisión por cuanto no se acreditó la convivencia de 5 años requeridos, inmediatamente anteriores al deceso (arch. 04, 05, 06, C02).

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a desatar la alzada, y conforme a

lo dispuesto en el artículo 66A del CPTSS, corresponde a la Sala determinar si la demandante acredita la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del afiliado Andrés Felipe Herrera Rojas, en calidad de compañera permanente del causante.

No es objeto de discusión en este asunto que Andrés Felipe Herrera falleció el 7 de octubre de 2007, dejando causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios; que mediante comunicación del 29 de febrero de 2008, Protección reconoció la pensión de sobrevivientes solicitada por la demandante en representación de sus hijos Mateo, Xiomara y Brayan Herrera Román, y le negó la prestación en condición de compañera permanente, por no acreditar el tiempo de convivencia (pág. 12, 22, 23, arch. 03, C01).

Pensión de sobrevivientes – En consonancia con la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, decantado está que en materia de pensión de sobrevivientes la norma aplicable es la vigente a la fecha del deceso del causante (7 de octubre de 2007), esto es, los arts. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los arts. 46 y 74 de la Ley 100 de 1993 (CSJ sentencias SL17521-2016, SL15873-2017, SL3348 - 2021, SL4958-2021, y SL2538 de 2021), según los cuales, para el caso, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando hubiera cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento, y se reputan beneficiarios de la prestación, en forma vitalicia, el cónyuge o compañero (a) permanente supérstite que a la fecha del deceso del causante tenga 30 o más años de edad, o hubiese procreado hijos con aquel.

En este orden, se observa que Andrés Felipe Herrera Rojas dejó causada la pensión de sobrevivientes en calidad de afiliado al sistema, en tanto que acreditó el mínimo de semanas exigido para el efecto, tanto así que fue reconocida la prestación a sus hijos menores; así mismo, que para la fecha del deceso del causante, a pesar de que la demandante tenía 26 años de edad, dado que nació el 24 de diciembre de 1980, había procreado 3 hijos con aquel, a los que les fue reconocida la pensión (pág. 10, 14 a 20, arch. 01, C01); de manera que le corresponde a esta sala determinar si el demandante acreditó la calidad de compañera permanente del causante, si la convivencia entre ellos se encontraba vigente para el momento de la muerte de aquel, y si tenía una

vocación de permanencia real y efectiva que se tradujera en la intención de conformar una familia.

Respecto a la convivencia requerida para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado al sistema pensional, precisa la Sala que es indiferente el hecho de si la misma se mantuvo en los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento del causante, conforme a criterio vigente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que acoge esta Sala de decisión, según el cual, la convivencia mínima de 5 años para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge o compañero permanente, es exigible únicamente cuando el causante de la prestación es un pensionado, aserto al que llegó tras analizar lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, en armonía con la exposición de motivos de la disposición y los fines de la pensión de sobrevivientes, para fijar así su verdadero alcance, el cual fue acogido de forma mayoritaria, en las sentencias CSJ SL3843-2020, CSJ SL3785-2020, CSJ SL4606-2020, CSJ SL36266-2020, CSJ SL5270-2021, CSJ SL489-2021, CSJ SL1905-2021, CSJ SL2222-2021, CSJ SL3948-2022, .

En la sentencia CSJ SL5270-2021, nuestro máximo órgano de cierre reafirmó el referido criterio, apartándose de lo razonado por la Corte Constitucional en la CC SU-149-2021, al considerar que no incurría en una interpretación irrazonable ni desproporcionada del supuesto normativo analizado, ni atentatoria del principio de sostenibilidad financiera del sistema, y estimó que la intelección adecuada del citado precepto normativo en concordancia con los pronunciamientos efectuados en sede de constitucionalidad, especialmente en la sentencia CC C-194-2003, y los fines y principios del Sistema Pensional, permitía concluir que:

Para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ningún tiempo **mínimo** de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensión de sobrevivientes, o en su caso, la indemnización sustitutiva de la misma o la devolución de saldos, de acuerdo al régimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causación de una u otra prestación.

[...]

En este caso, el elemento diferenciador lo constituye la condición en la que se encuentra el asegurado causante de la prestación, de un lado, el afiliado que está sufragando el seguro para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, que no tiene un derecho

pensional consolidado, pero se encuentra en construcción del mismo, y para dejar causada la pensión de sobrevivientes requiere el cumplimiento de una densidad mínima de cotizaciones prevista en la ley.

Por otra parte, el pensionado, que con un derecho consolidado, deja causada la prestación a los miembros de su núcleo familiar con el solo hecho de la muerte, circunstancia en la que adquiere relevancia la exigencia de un mínimo de tiempo de convivencia, se itera, para evitar fraudes al sistema pensional, proteger su núcleo familiar de reclamaciones artificiosas y contener conductas dirigidas a la obtención injustificada de beneficios económicos del Sistema, cuya sostenibilidad debe salvaguardarse de tales actuaciones, precisamente para que sea posible el cumplimiento de los fines para los cuales fue previsto. (CSJ SL5270 de 2021).

También, en las referidas providencias se aclaró que para la aplicación de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, no importaba la forma en que se hubiese constituido el núcleo familiar, esto es, si fue por vínculos jurídicos o naturales, como quiera que el aludido núcleo es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social. Lo anterior, de conformidad con el concepto de familia y su protección sin discriminación, adoptado por la Corte Constitucional en sentencia CC C-521-2007.

La Sala acoge la postura mayoritaria del órgano de cierre de esta especialidad, respecto de la interpretación del precepto contenido en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, por considerarla una interpretación adecuada, razonable, y que se acompasa con los fines de la pensión de sobrevivientes, esto es, la protección del núcleo familiar del asegurado o la asegurada que fallece; además por ser dicha corporación la llamada a unificar la jurisprudencia laboral, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 16 de la Ley 270 de 1996 y 235 de la CP.

Ahora bien, a efectos de determinar si la demandante logró demostrar una convivencia efectiva, real y material con el afiliado fallecido, vigente al momento del deceso de éste, en virtud del nuevo criterio doctrinal expuesto, debe recordarse que nuestro máximo órgano de cierre ha entendido por convivencia una *«[...] comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado»* (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245; CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605; CSJ SL1399-2018, y CSJ SL3785-2020 entre muchas otras).

Así, para acreditar su calidad de beneficiaria de la pensión deprecada, la demandante aportó como pruebas, declaración juramentada extra proceso rendida el 11 de octubre de 2007, por Jhon Alexis Londoño Sánchez y Luz Marina Uribe Restrepo, ante la Notaría Única de Caldas (Ant.), en la que manifestaron que *“CONOCIMOS DURANTE 9 Y 10 AÑOS RESPECTIVAMENTE AL SEÑOR ANDRÉS FELIPE HERRERA ROJAS, FALLECIDO EL 7 DE OCTUBRE DE 2007, EN TABLAZA, NOS CONSTA QUE EL FINADO, CONVIVÍA BAJO EL MISMO TECHO, DESDE HACÍA 7 AÑOS CON SU COMPAÑERA CLAUDIA MILENA ROMÁN GÓMEZ, ESTO HASTA EL DÍA DE SU FALLECIMIENTO, DE LA UNIÓN TUVIERON 3 HIJOS LLAMADOS MATEO, XIOMARA Y BRAYAN HERRERA ROMÁN, EL FALLECIDO NO DEJÓ MAS HIJOS, NI POR RECONOCER, NI ADOPTIVOS”*; y además, fotografías de eventos religiosos y festivos (pág. 24 a 27, arch. 03, C01)

Precisa la Sala que las fotografías aportadas, no evidencian el ánimo mutuo de convivencia de la demandante y el causante, y mucho menos su vigencia en la época de la muerte del afiliado, máxime si se tiene en cuenta que se desconoce la fecha en que fueron tomadas, y que no es posible determinar con precisión las circunstancias y situaciones específicas retratadas, así como las personas que aparecen en ellas. Así mismo, que la convivencia requerida para efectos de establecer la calidad de compañera permanente de la demandante respecto al afiliado fallecido, y la conformación de una familia con vocación de permanencia, no es posible tenerla por acreditada con las declaraciones extraprocesales rendidas ante un notario, puesto que, aun cuando no fue solicitada su ratificación por la parte pasiva, constituyen una simple formalidad incapaz de dar cuenta de si la pareja conformó una comunidad de vida estable y permanente, en tanto que no se describen allí las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló la misma, ni las razones por las que le consta a los declarantes los hechos afirmados, y además, resultan contrarias a lo informado por la reclamante en la visita domiciliaria que se llevó a cabo en la investigación administrativa para verificar la convivencia con el causante.

Del acta y formulario diligenciados en la visita del 7 de enero de 2008, allegó prueba la litisconsorte por pasiva Seguros de Vida Suramericana SA, quien indagó en interrogatorio de parte a la demandante acerca de si la firma contenida en folios 17 y 24 del arch. 17 del cuaderno 01 era la suya, misma que fue puesta en su conocimiento y reconocida por ella en esa declaración, de allí se desprende que informó que no vivía con el causante desde diciembre de

2006, que vivía en casa de su madre porque se habían separado, que el afiliado convivía con su madre y 6 hermanos, que durante los últimos meses cada 15 días aquel aportaba un mercado y en diciembre le daba una muda de ropa a los niños, lo que se verifica en los siguientes apartes de ese formulario, así:

Nombre	Edad	Ocupacion-Empresa	Estado Civil	Telefono	Vive bajo el mismo techo?
Matteo Herrera Roman	6	Estudiante	soltero		NO (6 meses)
Xiomara Herrera R.	5				Si
Braynon Herrera R.	4				Si

Tuvo otros hijos que hayan fallecido (diferente al afiliado)? Si () No ()

Ocupacion actual: _____ Empresa: _____ Telefono: _____

Está protegido por alguna Entidad Promotora de Salud (E.P.S)? No (X) Si ()

A cual? _____ Desde Cuándo? _____

En calidad de: Cotizante Independiente: _____

Cotizante con la Empresa: _____

Como Beneficiario de: _____

Fecha nacimiento: Junio 03/1981 Estado civil: soltero.

ÚLTIMOS EMPLEOS que desempeñó el fallecido:

EMPRESA	CIUDAD	CARGO	FECHA O TIEMPO
Luis Ferrnando Sanchez R.	Caldas	Conductor.	6 meses.
Transportes la Valeria			
	caldas.	Conductor.	5 años.

DS12004

Cuales miembros del grupo familiar aportaban para los gastos de su casa y en que cuantía.

NOMBRE	EDAD	PARENTESCO	CONCEPTO DEL GASTO	CUANTÍA MENSUAL
				\$
				\$
				\$

Dependía usted económicamente del afiliado fallecido?

SI (X) En que forma: Total () Parcial (X) Qué cuantía? \$ No sabe.

En que utiliza el aporte económico que recibía del afiliado? Renta de la casa.

Igualmente fue allegada solicitud formulada el 11 de abril de 2007 por defensora de familia adscrita al ICBF, dirigida a la Fiscalía del Municipio de la Estrella (Ant), para que se recibiera denuncia penal por inasistencia alimentaria a la señora Claudia Milena Román Gómez, en contra de Andrés Felipe Herrera Rojas “ya que nunca les ha aportado cuota alimentaria a sus hijos menores de edad, y no posee bienes ni sueldo para embargarlo”; solicitud de la misma defensora dirigida el 8 de marzo de 2007 a Comfama para que le hicieran entrega a la demandante, del subsidio familiar perteneciente a los hijos de ella y el causante, porque la madre de los menores nunca lo ha recibido, explicando que fue conciliado por las partes el 24 de abril de 2002 ante la comisaría de la Estrella; constancia de no acuerdo en audiencia de conciliación celebrada el 26 de febrero de 2007, a la que compareció Claudia Milena Román Gómez y fue citado Andrés Felipe Herrera Rojas, quien no se hizo presente, para la

modificación de cuota alimentaria en beneficio de sus hijos menores; y, conciliación del 24 de abril de 2002 celebrada entre ellos, en la que se acordó la cuota alimentaria a suministrar, el cuidado a cargo de la madre y las visitas a favor del padre (pág. 27 a 32, arch. 17, C01).

Finalmente, en interrogatorio de parte, la demandante afirmó que Andrés Felipe se suicidó, estando en casa de sus padres; que para la fecha de la muerte él vivía con ella pero iba mucho donde los papás, y ese día estaban enojados; que el hogar estaba compuesto por sus tres hijos, él, ella, y vivían con la mamá de la accionante; que cuando discutían él se iba para donde su mamá y al día siguiente o a los dos días volvía; que convivió desde el 2000 hasta el 2007 cuando él falleció; que era conductor de colectivo de Caldas, pero no sabe cuál era su salario al momento del fallecimiento, ni recuerda la dirección en la que vivían; las exequias las pagó la familia de Andrés Felipe, los trámites los realizaron los hermanos; que ella presentó denuncia por inasistencia alimentaria en el 2002, cuando estaba en embarazo de la otra niña, y después lo demandó cuando se fue para donde la mamá, que en dos ocasiones fue a la comisaría de familia; que no es cierto que estaban separados, él siempre mercaba y nunca le faltaba con las cosas; que cuando ella estaba en embarazo él se iba a vivir a la casa de su mamá, el tiempo del embarazo, en los dos primeros embarazos, en el último como le dio preclamsia estuvo más pendiente, y su último hijo nació en 2003; y, como no explicó porque en su declaración afirmaba que convivió con el afiliado hasta el día de su muerte y en la entrevista de los funcionarios de Protección dijo que se habían separado desde diciembre de 2006, el *a quo* la declaró renuente ante sus respuestas evasivas, tuvo por acreditada la referida separación.

Del anterior recuento, concluye la Sala que no se logró demostrar la convivencia aducida, coincidiendo en ello con el *a quo*, pues en virtud del principio de libre formación del convencimiento establecido en el art. 61 del CPTSS, el juez puede basar su decisión en aquellas pruebas que le ofrecen mayor credibilidad en desmedro de otras (CSJ SL1927 - 2021).

Así las cosas, bajo las reglas de la experiencia y la sana crítica, al tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 del CPTSS, considera esta Sala que con el material probatorio analizado de manera conjunta y armónica, en verdad no se acredita que al momento del deceso del afiliado, la convivencia entre este y la demandante se encontrara vigente, pues de las pruebas documentales se

desprende lo contrario, lo informado por ella unos meses después de la muerte del padre de sus hijos, contradice las escuetas declaraciones extra juicio allegadas, y lo expuesto en el curso del proceso, sin que se soporte esa información en algún otro medio de convicción, y de la referida documental se desprende, sin lugar a dudas, que la convivencia que pudo existir culminó en diciembre de 2006, esto es, 9 o 10 meses antes de la muerte del afiliado, razón por la cual la actora desde esa data no tenía la calidad de compañera permanente del causante, y por tanto, no puede tenersele como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión de su muerte, toda vez que no existía ni persistía para la época del deceso el ánimo de conformar una familia, estabilidad y continuidad en la convivencia, lo que se corrobora aún más con las diligencias surtidas en torno a la cuota alimentaria en el año 2007, con posterioridad a la referida separación, que resultan coherentes con ese hecho, y por el contrario, lucen incompatibles con la convivencia efectiva que se alega por la parte actora.

Además, el certificado de la EPS aducido por la apoderada de la demandante, como bien lo informó, solo podría dar cuenta de su calidad de beneficiaria como compañera permanente del causante en agosto de 2006, no meses sino más de un año antes del fallecimiento, y meses antes de la fecha en la que aquella afirmó que se había verificado la separación, en diciembre de 2006, que a su vez, no son “*pocos días*” antes del fallecimiento, como lo afirma la recurrente, sino aproximadamente 10 meses, lo que indica que para la fecha de la muerte, por haber dejado de convivir 9 o 10 meses atrás, la demandante efectivamente no contaba con la calidad de compañera permanente del causante, porque tratándose de una situación de hecho que se origina en la convivencia, termina justamente por la ausencia de esa unión, que implica por lo menos el ánimo de compartir techo, lecho y mesa, cuya demostración brilla por su ausencia en estas diligencias, y si bien las denuncias por inasistencia alimentaria por sí mismas no desvirtúan la convivencia, si le dan peso a la afirmación efectuada en el trámite administrativo y le restan credibilidad a lo manifestado en el trámite judicial.

Por lo hasta aquí expuesto, considera la Sala que no le asiste el derecho a la demandante al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; y, habrá de **confirmarse** el fallo de primer grado. Sin costas en la alzada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2022 por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín, acorde con lo expuesto en las consideraciones de esta decisión.

SEGUNDO: Sin costas en la alzada.

TERCERO: Esta sentencia deberá ser notificada a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el artículo 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada

Hipervínculo expediente digital: [\(253\) 05001310501620200021401](https://www.cjv.gov.co/consultas/consultas/05001310501620200021401)

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle
Magistrada
Sala 017 Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b0c625b3adb211852c31ba6fc94b4c2ad74658a9f940b1b256623f2b6e29452c**

Documento generado en 11/12/2023 01:53:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>